



Las decisiones por las que la presidenta Claudia Sheinbaum será recordada empiezan a perfilarse. Su verdadero gobierno apenas empieza.



**LUIS CARLOS
UGALDE**

luiscarlosugalde@integralia.com.mx

Primer año de gobierno

La presidenta Sheinbaum cumplió un año, pero su verdadero gobierno apenas empieza. La gestión de su gobierno ha sido primordialmente administrar las herencias recibidas, buenas y malas. El resultado más significativo anunciado este año ha sido la reducción de la pobreza: entre 2018 y 2024, más de 13 millones de personas salieron de ella. Son buenas noticias, pero son herencia, no mérito del año uno.

Las decisiones por las que Sheinbaum será recordada empiezan a perfilarse. Primero, su postura frente a la corrupción. La detención del vicealmirante Manuel Farías –sobrino político del exsecretario de Marina– acusado de integrar una red de huachicol fiscal es una buena señal de romper con la complicidad del gobierno anterior. El desafío es que la lista de funcionarios vinculados a presuntos casos de corrupción o incluso coludidos con el crimen es amplia: el expediente más conocido es el de La Barredora en Tabasco, pero hay muchos otros de gobernadores y legis-

ladores heredados por López Obrador. ¿Romperá ella el pacto de impunidad o cuidará la complicidad heredada?

El segundo tema de evaluación será la seguridad. El gobierno dejó a un lado los “abrazos, no balazos”: más coordinación federal, más cooperación con Estados Unidos y golpear cadenas logísticas del fentanilo. Asimismo, los homicidios muestran una baja relevante: de septiembre de 2024 a agosto de 2025, el promedio diario cayó 32%. Además, agosto fue el mes con menos homicidios desde 2015. Son señales positivas, pero el desafío es sostener la estrategia a pesar de las presiones y las conspiraciones de adentro y de afuera.

Tercero, la relación con Trump. Aunque López Obrador ya había sido transaccional en los primeros dos años de su gobierno, Sheinbaum ha sido más pragmática y ha cedido en más temas, notoriamente el de seguridad, donde incluso ha llevado a cabo “traslados” de reos acusados en Estados Unidos sin un proceso de extradición. Es una estrategia

de dar para recibir, notoriamente en el tema comercial, pero nada garantiza que la “buena” conducta de México será retribuida por Trump en la renegociación del T-MEC el próximo año.

El cuarto tema de evaluación será el crecimiento de la economía. Sheinbaum corteja a los empresarios para que inviertan, pero el país carece de energía suficiente y su programa para promover nuevas fuentes ha generado entusiasmo limitado. A esto se suma la falta de infraestructura disponible –carreteras sin mantenimiento, puertos saturados, un aeropuerto con fallas operativas– y la incertidumbre jurídica que abre la reforma judicial. Con ese entorno, los incentivos lucen más como discurso que como motor: el Plan México corre el riesgo de rendir resultados muy acotados.

Quinto, la reforma judicial. Aunque se trata de una propuesta original de López Obrador, Sheinbaum la propulsó a pesar de que tenía pretextos para matizarla o desecharla. La Corte le dio una

salida decorosa cuando a fines de 2024 propuso validar la elección de ministros de la Corte pero invalidar la de jueces federales. Ella siguió adelante y ha hecho de la elección judicial un estandarte de su gobierno. En los siguientes años veremos si mejoran los tiempos de resolución, la calidad de las sentencias y la confianza ciudadana. Este será –muy probablemente– el asunto más relevante por el que su gobierno será evaluado en las próximas décadas.

Sexto, la eventual reforma electoral. Si Sheinbaum es congruente con la tradición de la izquierda democrática de defender el voto libre y la cancha pareja, será recordada como una demócrata; si en cambio aprovecha la reforma para debilitar la competencia y capturar a las instituciones electorales, será recordada como traidora de la lucha que la izquierda inició desde los años sesenta del siglo XX.

Por último, la Presidenta será evaluada por su manejo de la economía. El paquete económico para 2026 presagia un manejo ortodoxo de las finanzas públicas con continuidad de los programas sociales. El problema está en el mediano plazo: el gobierno cumplirá con reducir el déficit pero los recursos de inversión son muy bajos y eso sacrificará el potencial de crecimiento de la economía mexicana. Sin reforma fiscal y sin mejor calidad del gasto, el país corre el riesgo de administrar la escasez, no de superarla.